



QUEJA 318/2017

Incidente de suspensión relativo al juicio de amparo indirecto *****

MATERIA. Administrativa

QUEJOSA.

*** ***** ***** *****

RECURRENTE.

***** ***** ***** ** *****

***** ** ***** *****

MAGISTRADO PONENTE.

Jorge Dionisio Guzmán González

SECRETARIO.

Héctor Gerardo Lamas Castillo

La Paz, Baja California Sur, acuerdo del Tribunal Colegiado del Vigésimo Sexto Circuito, correspondiente a la sesión celebrada el once de julio de dos mil diecisiete.

V I S T O, para resolver el recurso de queja administrativa 318/2017.

RESULTANDO

PRIMERO. Por escrito recibido el veintidós de junio de dos mil diecisiete, ante la Oficialía de Partes del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Baja California Sur, con residencia en La Paz, ***** **, ***** ** ***** ***** **, ***** **, por conducto de su apoderado ***** **, ***** , interpuso recurso de queja con fundamento en el artículo 97, fracción I, inciso b), de la Ley de Amparo, en contra del auto dictado el trece de junio de dos mil diecisiete, por el

juez primero de distrito, en los autos del incidente de suspensión relativo al juicio de amparo indirecto *********, en el que, entre otras cuestiones, se determinó conceder la suspensión provisional de los actos reclamados.

SEGUNDO. Mediante oficio 20501/2017, recibido por la secretaria de guardia de este tribunal colegiado, el veintidós de junio de dos mil diecisiete, el Juez Primero de Distrito en el Estado de Baja California Sur remitió las constancias relativas a la queja interpuesta por la parte quejosa.

TERCERO. Sin embargo, por auto de veintitrés de junio de dos mil diecisiete, el presidente de este tribunal colegiado requirió al juez de distrito para que remitiera la constancia de notificación del auto impugnado a la recurrente, así como del acuerdo donde se dio trámite al recurso, y su notificación a las partes.

CUARTO. Finalmente, el diez de julio de dos mil diecisiete, a las trece horas con once minutos, se tuvo por recibido el oficio 22457/2017, por medio del cual el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Baja California Sur, envió la totalidad de las constancias que le fueron requeridas.

QUINTO. En esa misma fecha, la presidencia de este órgano jurisdiccional admitió el recurso de queja; y, se ordenó su turno al Magistrado Jorge Dionisio Guzmán González, para la formulación del proyecto de resolución, de acuerdo al artículo 101, último párrafo, segunda parte, de la Ley de Amparo.



CONSIDERANDO

PRIMERO. Este Tribunal Colegiado del Vigésimo Sexto Circuito es competente legalmente para conocer y resolver el presente recurso de queja, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 97 fracción I, inciso b), 98 fracción I, 99 y 101, último párrafo, de la Ley de Amparo; 37 fracción III, y 144 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; así como, en el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, aprobado en sesión ordinaria de veintitrés de enero de dos mil trece, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide la república mexicana, y al número, jurisdicción territorial y especialización por materia de los tribunales colegiados y unitarios de circuito, así como los juzgados de distrito; toda vez que se trata de un recurso de queja que se interpone en contra de un auto donde se concedió la suspensión provisional, dictado por el Juez Primero de Distrito en el Estado, con sede en La Paz, Baja California Sur, donde este órgano colegiado ejerce jurisdicción.

SEGUNDO. Oportunidad. El presente recurso fue interpuesto en tiempo; en efecto, el artículo 98, fracción I de la Ley de Amparo, dispone que el plazo para la interposición del recurso de queja, debe presentarse dentro del plazo de dos días hábiles, cuando se trate de suspensión de plano o provisional.

En el caso, el auto materia del recurso se notificó personalmente, el veintiocho de junio de dos mil diecisiete; notificación que surtió efectos el veintinueve siguiente, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 31, fracción II, de la Ley de Amparo.

Así, el plazo inició el treinta de junio y concluyó el tres de julio; descontando los días sábados y domingos comprendidos dentro de ese término, de conformidad con los artículos 19 de la Ley de Amparo.

Luego, si el recurso se recibió el veintidós de junio de dos mil diecisiete, entonces está en tiempo.

Sin que se obstáculo, que el medio de defensa se hubiere presentado antes de que empezara el plazo para su interposición, dado que el citado artículo 98 de la Ley de Amparo, sólo refiere que la queja no puede hacerse valer después de cinco días, pero no prohíbe que sea exhibido antes.

Es aplicable por identidad jurídica, la tesis jurisprudencial, cuyos datos de identificación, rubro y texto, dicen:

“RECURSO DE RECLAMACIÓN. SU INTERPOSICIÓN NO ES EXTEMPORÁNEA SI SE REALIZA ANTES DE QUE INICIE EL PLAZO PARA HACERLO. Conforme al artículo 104, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, el recurso de reclamación podrá interponerse por cualquiera de las partes, por escrito, dentro del término de tres días siguientes al en que surta efectos la notificación de la resolución impugnada. Ahora bien, dicho numeral sólo refiere que el aludido medio de defensa no puede hacerse valer después de tres días, por tanto, no impide



que el escrito correspondiente se presente antes de iniciado ese término. De ahí que si dicho recurso se interpone antes de que inicie el plazo para hacerlo, su presentación no es extemporánea.

Época: Décima Época, Registro: 2009408, Instancia: Primera Sala, Tipo de Tesis: Jurisprudencia, Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 19, Junio de 2015, Tomo I, Materia(s): Común, Tesis: 1a./J. 41/2015 (10a.), Página: 569.”

TERCERO. Legitimación. El recurso fue interpuesto por parte legítima, ya que a la recurrente *****
** *****, le asiste el carácter de tercero interesado.

CUARTO. Antecedente. En principio, es conveniente señalar brevemente las constancias relativas al incidente de suspensión del que deriva la presente queja, mismas que merecen plena eficacia probatoria de acuerdo con lo dispuesto por los artículos 220 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición del segundo párrafo, de su artículo 2º, al tener el carácter de documentales públicas, de las que se obtiene lo siguiente:

I. *** ***** **, por su propio derecho, presentó de demanda de amparo, de la cual tocó conocer al Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Baja California Sur, con sede en La Paz, en el juicio de amparo indirecto 763/2017;

y, señaló como actos reclamados de las autoridades responsables los siguientes:

“III. AUTORIDADES RESPONSABLES. Se señalan como ordenadoras y ejecutoras sin saber quién podría ser la ordenadora o ejecutora:

1. Presidente Municipal del Ayuntamiento de Los Cabos en Baja California Sur, con domicilio conocido.

2. Presidente del Consejo Municipal de Giros Restringidos sobre venta y consumo de bebidas alcohólicas del Municipio de Baja California Sur, domicilio conocido en el Ayuntamiento del Municipio de San José del Cabo.

3. Tesorera General Municipal del Ayuntamiento de Los Cabos en Baja California Sur, con domicilio conocido todos en su residencia oficial H. Ayuntamiento de San José del Cabo BCS.

4. Directora Municipal de Ingresos del Ayuntamiento de Los Cabos en Baja California Sur, con domicilio conocido todos en su residencia oficial H. Ayuntamiento de San José del Cabo BCS.

5. Departamento de Giros Comerciales del Ayuntamiento de Los Cabos en Baja California Sur.

6. C. Jefe del Departamento de Inspección Fiscal del Ayuntamiento de Los Cabos domicilio conocido en su residencia oficial H. Ayuntamiento de San José del Cabo BCS.

IV. ACTO RECLAMADO. De las autoridades denominadas en los puntos 1, 2, 3, 4, 5 y 6, responsables reclamo:

*A) El ilegal cambio de denominación o razón social que se pretende autorizar a la empresa ***** ***

***** titular de la licencia adicional o anexo “B” número*

****** otorgada en el área de playa de la zfmt con el giro*

Restaurante Beach con el objeto de que opere con una nueva



*razón social en el inmueble en donde cuento con mi licencia de funcionamiento municipal número ***** con actividad de restaurante bar (consumo de alimentos y bebidas alcohólicas) con razón social “*** *****”, ubicado en ***** ***** ***** ** * ***** ***** playa el médano a un costado del ***** ***** ***** ***** ***** con superficie (410.142 metros cuadrados), lugar donde se había instalado el giro comercial “*****”*

[illegible]

Esto como consecuencia de su aviso de cambio de denominación o razón social promovido por dicha empresa, con fecha siete de abril del presente año.

De la autoridad denominada Tesorera General Municipal,
Directora de Ingresos, Jefe del Departamento de Inspección
Fiscal del Ayuntamiento de Los Cabos, se reclama:

C) La orden verbal o escrita de autorizarle a la empresa ***** ., operar y funcionar con su licencia adicional o anexo “B” número ***** otorgada en el área de playa de la zfmt al giro restaurante beach, en el lugar donde cuento con mi licencia de funcionamiento ubicado

en *****
 , a un costado del ***.

D) La orden verbal o escrita de autorizarle a la empresa
 ***** realizar la venta de bebidas
 alcohólicas sin la correspondiente autorización del consejo
 municipal de giros restringidos sobre venta y consumo de
 bebidas alcohólicas del municipio de Los Cabos en Baja
 California Sur, en el inmueble en donde se encuentra instalado
 el ***** actualmente *****
 ***** y el club de playa *****.

E) Discriminación, retardo, omisión e incumplimiento grave
 sus deberes y obligaciones en consistentes en la acción y
 omisión de realizar la visita de inspección y en su defecto
 materializar la correspondiente clausura a la empresa
 ***** , quien explota el giro
 comercial Restaurant Beach ubicado en el área de plata de zfmt,
 por realizar la venta de la venta de bebidas alcohólicas en un
 lugar distinto al autorizado, en su licencia adicional o anexo "B"
 número *****.

F) Discriminación, falta de igualdad jurídica, al omitir
 garantizar y proteger mis derechos humanos y garantías,
 respecto a mis derechos de explotación que derivan de la
 licencia municipal número ***** con razón social ***
 ***** y en contra de todos los actos administrativos que se
 encuentra realizando la empresa *****
 ****, con el objeto de obtener las licencias y/o autorizaciones
 municipales con el d fincar en el lugar donde cuento con mi
 licencia de funcionamiento, mejores derechos de explotación.

Esto como consecuencia de mi escrito de fecha tres de
 mayo del año 2017.

G) Discriminación, retardo, omisión e incumplimiento grave
 de sus deberes y obligaciones en consistentes en la acción y
 omisión de realizar la visita de inspección y en su defecto



materializar la correspondiente clausura al giro denominado ***** ubicado en ***** del lugar conocido como el médano en la delegación de Cabo San Lucas, por carecer éste de licencia de funcionamiento.”

II. En la demanda se pidió la suspensión provisional, de la manera siguiente:

“Con fundamento en el artículo 125 y 128 (sic) de la Ley de Amparo, solicitamos la suspensión del acto reclamado de forma provisional y en su momento, en definitiva, para los efectos:

1. De que se ordene la suspensión administrativa de todo trámite encausado por la empresa ***** , con el objeto de obtener el cambio de denominación o razón social bajo cualquier nombre en el inmueble ubicado en avenida ***** y Andador Costero de la zona federal marítimo terrestre del lugar conocido como ***** en la delegación municipal de Cabo San Lucas, B.C.S. (donde se estableció el giro ***** y/o *****).
2. Y no se entregue y/o autorice por parte de las autoridades responsables a la empresa ***** , ***** ningún cambio de denominación o razón social para el ejercicio fiscal 2017, en el inmueble ubicado en avenida ***** y andador costero de la zona federal marítimo terrestre el lugar conocido como ***** en la delegación municipal de Cabo San Lucas, B.C.S. (donde se estableció el giro ***** Y/o *****).

3. De que se ordene a las autoridades se proceda dentro del ámbito de sus facultades, verifique la existencia de licencias y permisos de los giros comerciales ***** , *****

*****, y Restaurant donde instalo el giro Aleta y tome las medidas necesarias a fin de evitar daños a terceros.”

III. En proveído de trece de junio de dos mil dos mil diecisiete, el Juez Primero de Distrito en el Estado de Baja California Sur, resolvió por una parte negar la suspensión provisional, y por la otra concederla; bajo los argumentos esenciales que se citan a continuación:

“En primer término, los argumentos vertidos en el capítulo de suspensión en contra del acto que se reclama, en específico los señalados en el punto número tres, son materia del estudio de fondo que se realice en la sentencia que se dicte en el juicio principal del que deriva el presente incidente.

Así que, de concederse la medida suspensorial solicitada, se estarían estudiando cuestiones que se refieren a la resolución final del amparo, pues no debe perderse de vista que los efectos de la suspensión estriban en mantener las cosas que guardaban al decretarla y no el de restituirlas al que tenían antes de la violación constitucional, pues al resolver sobre ella no puede estudiarse cuestiones que se refieren al fondo del amparo; ya que, se reitera, ello deberá resolverse precisamente al dictarse la sentencia definitiva que se pronuncie en el juicio principal de donde deriva la presente incidencia.

...

En razón de lo anterior, se niega la suspensión provisional que solicita por la parte quejosa, para los efectos detallados en el punto número tres; en virtud de que se trata materia del fondo del juicio de amparo, en contra del cual es improcedente conceder la medida cautelar.

...

En efecto, según se observa de los antecedentes que informan la demanda de amparo, el quejoso reclama de cambio



de razón social que se pretende otorgar a favor de las empresas

*****.
*****'

*****; Y **

***** *****
, en el inmueble que la quejosa

tiene su licencia de funcionamiento; por lo que resulta indudable que, la parte quejosa acredita su interés suspensivo, pues para acreditar la afectación de la que se duele sobre la licencia en el bien inmueble la acredita con las copias simples consistentes en:

1. La documental pública. Consistente en el recibo de pago ***** de fecha 26 de abril del año 2017 por la cantidad de \$***** por el concepto de pago refrendo de la licencia de alcohol restaurante bar. (***) *****).

Sobre tales premisas, se concede la suspensión provisional a la quejosa, para los efectos de que las autoridades responsables se abstengan de autorizar y otorgar cualquier cambio de denominación o razón social o trámite relacionado, para el ejercicio fiscal 2017 a las empresas *** *****

*****:v*****

, respecto del inmueble en donde la quejosa
cuenta con la licencia de funcionamiento municipal de
restaurante bar (consumo de alimentos, licor y cerveza al copeo)
número ***** con razón social *** *****; con una
superficie de cuatrocientos diez metros cuadrados, ubicado en
paseo El Pescador # 1 y Andador Costero (actualmente
restaurante *****) del lugar conocido como

en la Delegación de Cabo San Lucas.”

La anterior determinación, es la materia de la presente queja.

QUINTO. Consideraciones previas. No es materia del presente recurso de queja la negativa de conceder la suspensión provisional de los actos reclamados, para los efectos solicitados por la quejosa, en el punto tercero del capítulo de suspensión de su demanda de amparo; el cual se hizo consistir en que se ordene a las autoridades se proceda, dentro del ámbito de sus facultades, para verifiquen la existencia de licencias y permisos de los giros comerciales ***** , ***** , y restaurante donde instaló el giro ***** y tome las medidas necesarias a fin de evitar daños a terceros.

Lo anterior, pues la anterior determinación no fue materia de impugnación por la parte a quien le pudiera deparar perjuicio. Sustenta lo anterior, por identidad de razón, la jurisprudencia que dice:

“REVISIÓN. NO ES MATERIA DE ESTE RECURSO EL RESOLUTIVO QUE NO AFECTA A LA RECURRENTE Y NO SE IMPUGNA POR LA PARTE A QUIEN PUDO PERJUDICAR. Si en una sentencia existe diverso resolutivo sustentado en las respectivas consideraciones que no afectan a la parte recurrente y no son combatidas por quien le pudo afectar, debe precisarse que no son materia de la revisión dichas consideraciones y resolutivo.

Época: Octava Época, Registro: 207016, Instancia: Tercera Sala, Tipo de Tesis: Jurisprudencia, Fuente: Semanario Judicial de la Federación, Tomo VII, Abril de 1991, Materia(s): Común, Tesis: 3a./J. 20/91, Página: 26.

SEXTO. Determinación.

En el primer agravio se sostiene que de la propia lectura de la demanda se aprecia claramente que la quejosa afirma que la ahora recurrente se le pretende autorizar el cambio de denominación o razón social, así como el cambio de ubicación o domicilio, actos éstos que evidentemente son de realización futura e incierta, ello en virtud de que no es una consecuencia automática y certera de que ante dichas solicitudes sea inminente y obligatorio para la autoridad el autorizar los cambios solicitados.

Además, que la quejosa no aporta dato o prueba alguna respecto de la solicitud que afirma realizó la tercero interesada con relación al otorgamiento de los referidos cambios, por lo que no es posible afirmar de manera objetiva que tales actos reclamados sean de ejecución inminente.

Los argumentos son inoperantes.

En efecto, la legitimación para que los terceros interesados interpongan el recurso de queja contra el acuerdo que otorga la suspensión provisional, sólo se genera cuando la resolución pueda causar una afectación en detrimento de sus intereses o derechos; pero tal perjuicio no debe ser meramente hipotético, sino un hecho real, cuya demostración incumbe a los propios recurrentes que invoquen su presencia, como uno de los presupuestos necesarios para interponer el recurso.

De ahí que, si en el motivo de inconformidad en estudio se pretende señalar que de manera incorrecta se le otorgó la medida cautelar a la quejosa, pues el cambio de denominación o razón social, así como el cambio de ubicación o domicilio, son de realización futura e incierta, esto es, que a la fecha son inexistentes, ni existe motivo para establecer que se vayan a dar de manera inminente, y por lo tanto no hay materia sobre la cual concederla; inclusive, se hace alusión que no existe prueba de que la recurrente hubiere realizado tales solicitudes, se insiste son inoperantes los argumentos.

Lo anterior, ya que ante tales circunstancias resulta evidente que a la tercero interesada no le depara perjuicio alguno que se conceda la suspensión provisional para que la autoridad no autorice tales cambios, pues no se le priva del derecho a ejecutar acto alguno que haya gestionado o tenga interés que subsista, ni se restringe su libertad de acción.

Por otra parte, en el escrito de agravios se hace alusión a que es incorrecto que se otorgue la suspensión provisional de los actos reclamados consistentes en la orden verbal o escrita de autorizar a ***** **** ***** ** *****

***** ** ***** ***** , a funcionar con su licencia adicional o anexo "B" número ***** , y la orden verbal o escrita de autorizarle a *** ***** ***** ***** , realizar la venta de bebidas alcohólicas sin la correspondiente autorización; pues se



trata de actos consumados, sobre los cuales no es procedente otorgar la medida.

Este tribunal colegiado considera que son inoperantes los argumentos, pues del análisis integral del acuerdo de trece de junio de dos mil siete, se advierte que el juez federal no otorgó la suspensión provisional sobre las referidas autorizaciones verbales o escritas; además, de la demanda de amparo tampoco se desprende que la quejosa al momento de solicitar la suspensión, la solicitara sobre tales actos.

Por otro lado, la inconforme afirma que se concede la suspensión provisional, para el efecto de que las autoridades responsables se abstengan de realizar y autorizar cualquier cambio o trámite relacionado con el ejercicio fiscal 2017 a las empresas terceros interesadas, entre ellas la sociedad ***

***** ** ***** , situación que vulnera lo dispuesto en el artículo 128, fracción I de la Ley de Amparo.

Ello, en virtud de que el quejoso en ningún momento realizó petición alguna en el sentido de que se le otorgara la suspensión provisional respecto de actos reclamados relacionados con la referida interesada, más aun que a dicha sociedad tercero interesada en ningún momento se le reclamó acto alguno.

Es también inoperante el agravio, debido a que la recurrente no tiene legitimación para realizar argumentos en favor de otras partes en el juicio, sobre todo cuando lo determinado por el juez de distrito en ese sentido no le depara perjuicio alguno.

Por último, se acusa que le causa perjuicio a la tercero interesada el que se otorgue la suspensión provisional, sin que se le imponga a la quejosa la obligación de otorgar caución bastante para garantizar los daños o perjuicios que se le puedan ocasionar con el otorgamiento de dicha medida cautelar.

Es **fundado** el agravio.

En efecto, el artículo 132 de la Ley de Amparo, establece que en los casos en que sea procedente la suspensión pero pueda ocasionar daño o perjuicio a tercero y la misma se conceda, el quejoso deberá otorgar garantía bastante para reparar el daño e indemnizar los perjuicios que con aquélla se causaren si no obtuviere sentencia favorable en el juicio de amparo.

Y, que cuando con la suspensión puedan afectarse derechos del tercero interesado que no sean estimables en dinero, el órgano jurisdiccional fijará discrecionalmente el importe de la garantía.

Siendo que, en el caso el juez federal concedió la suspensión provisional para el efecto de que las autoridades responsables se abstengan de autorizar y otorgar cualquier



cambio de denominación o razón social o trámite relacionado con la sociedad recurrente, entre otras sociedades, para el ejercicio fiscal 2017, respecto del inmueble en donde la quejosa cuenta con la licencia de funcionamiento municipal de restaurante bar (consumo de alimentos, licor y cerveza al copeo).

De lo expuesto, resulta evidente que a la recurrente se le pueden ocasionar daños y perjuicios derivados del otorgamiento de la medida cautelar, en virtud que se le impediría obtener una licencia para funcionar como restaurante bar.

Sin embargo, este tribunal al no contar con elementos objetivos para determinar el monto que debe de garantizar la quejosa para que la medida continúe surtiendo efectos, la establecerá de manera discrecional.

Pues bien, tomando en consideración que, como se adelantó, con la suspensión provisional se impide que a la recurrente se le otorgue una licencia para operar un restaurante bar, con lo que se le pudiera llegar a privar de una ganancia lícita, que el mismo se encuentra en la ciudad de Cabo San Lucas, que el lugar cuenta con una superficie de cuatrocientos diez metros cuadrados, ubicado en paseo El Pescador # 1 y Andador Costero (actualmente restaurante *****
*****) del lugar conocido como ** *****, donde es un hecho notorio tiene un gran tráfico de personas, por ser un lugar

turístico cerca del mar, y que la medida cautelar pudiera durar aproximadamente seis meses, es que se fija el monto de \$***** (***** ***)*****).

Es aplicable, por identidad jurídica, la jurisprudencia que se transcribe a continuación:

“SUSPENSIÓN EN EL AMPARO. LA FACULTAD DISCRECIONAL PARA FIJAR EL MONTO DE LA GARANTÍA PARA QUE SURTA EFECTOS CUANDO LOS DERECHOS QUE PUDIERAN AFECTARSE CON DICHA MEDIDA NO SEAN ESTIMABLES EN DINERO, NO PUEDE SER ARBITRARIA. El artículo 125 de la Ley de Amparo establece: *"En los casos en que es procedente la suspensión, pero pueda ocasionar daño o perjuicio a tercero, se concederá si el quejoso otorga garantía bastante para reparar el daño e indemnizar los perjuicios que con aquélla se causaron si no obtiene sentencia favorable en el juicio de amparo.-Cuando con la suspensión puedan afectarse derechos del tercero perjudicado que no sean estimables en dinero, la autoridad que conozca del amparo fijará discrecionalmente el importe de la garantía."* Ahora bien, del segundo párrafo de dicho precepto se colige que la facultad discrecional que concede a los órganos de control constitucional para fijar el monto de la garantía para que surta efectos la suspensión cuando los derechos que pudieran afectarse con tal medida no sean estimables en dinero no puede ser arbitraria, sino que debe ejercerse de manera razonada, atendiendo a las circunstancias peculiares del caso, a la naturaleza de los actos reclamados, al tiempo probable de la duración del juicio, así como a los derechos que pudieran afectarse.

Época: Novena Época, Registro: 163259, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Tipo de Tesis: Jurisprudencia, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y



su Gaceta, Tomo XXXII, Diciembre de 2010, Materia(s): Común, Tesis: VI.2o.C. J/321, Página: 1711.”

En la inteligencia, de que conforme al artículo 136 de la ley de Amparo, la medida cautelar continuara surtiendo efectos, pero dejara de hacer si en el plazo de cinco días contados a partir de la notificación de la presente determinación, la quejosa no exhibe la garantía referida, en cualquiera de las formas autorizadas por la ley.

Por tanto, al ser fundado uno de los agravios, lo que procede es declarar parcialmente fundado el presente recurso de queja, interpuesto en contra del auto de trece de junio de dos mil diecisiete, dictado en el incidente de suspensión, derivado del juicio de amparo 763/2017, del índice del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Baja California Sur.

Por lo expuesto y con fundamento en los artículos 97, fracción I, inciso b), 98, fracción I, y 99 de la Ley de Amparo, se resuelve:

Por lo expuesto y fundado, se resuelve:

ÚNICO. Es parcialmente fundado el recurso de queja interpuesto contra el auto de trece de junio de dos mil diecisiete, en el incidente de suspensión relativo al juicio de amparo indirecto 763/2016, índice del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Baja California Sur, con residencia en La Paz.

NOTIFÍQUESE; con testimonio de esta resolución, y, en su oportunidad, archívese el presente expediente como asunto concluido.

Así, por unanimidad de votos lo resolvió el Tribunal Colegiado del Vigésimo Sexto Circuito, integrado por los Magistrados Presidente Alejandro Gracia Gómez, Ponente Jorge Dionisio Guzmán González y Enrique Arizpe Rodríguez, quienes firman con el Secretario de Acuerdos Licenciado Nerik Atahualpa Camacho Solorio que autoriza y da fe.

El doce de noviembre de dos mil veinticuatro, el licenciado Héctor Gerardo Lamas Castillo, Secretario(a), con adscripción en el Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Sexto Circuito, con residencia en La Paz, Baja California Sur, hago constar y certifico que en esta versión pública no existe información clasificada como confidencial o reservada en términos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Conste.